



VÍCTIMAS Y ACTORES ARMADOS EN LA EDUCACIÓN



## **El posconflicto en las universidades de Medellín**

Periódico Contexto, Universidad Pontificia Bolivariana

En el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, el Ministerio de Educación decidió poner en marcha un programa dedicado a la reflexión, la discusión y la enseñanza de asuntos claves para la integración y la convivencia de la nación en el posible escenario del posconflicto. Así nació la Cátedra de la Paz, amparada por el Decreto 1038 (2015) de la Ley 1732 (2014).

La directriz definió las temáticas a tratar y las áreas donde se podían insertar para los establecimientos de educación preescolar, básica y media, mientras que, para las instituciones de educación superior, primó la libre implementación del decreto, obedeciendo al principio de autonomía universitaria. La condición fue que cada comunidad académica pudiera, como lo estipula el Artículo 9º, “contar con espacios de aprendizaje, reflexión y diálogo para la vivencia de la paz” (2015).

Las universidades de Medellín se han apropiado de la coyuntura que atraviesa Colombia para capacitar a sus estudiantes y docentes, de modo que puedan responder a las exigencias de las circunstancias actuales. Las aulas, los auditorios y los corredores de las principales instituciones de educación superior en la ciudad han sido puestos a disposición del posconflicto, fenómeno que, una vez inicie, concernirá a múltiples disciplinas y áreas del saber.

Varios rectores de universidades públicas y privadas de la ciudad coinciden en que la academia, como espacio de construcción de conocimiento, pero también de formación humana, adquiere un compromiso con la comunidad a la cual se adscribe.

Para ellos, la búsqueda de la paz trasciende los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, y se convierte en un asunto de interés social, que le corresponde a la ciudadanía en general. De allí que entendieran la

Cátedra de la Paz como un ejercicio de civismo y participación.

John Fernando Escobar Martínez, rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se refiere al programa como una “articulación de los conocimientos desarrollados”, los cuales, a su vez, reúnen aspiraciones e intenciones para la reconstrucción de un país que ha soportado un conflicto armado interno durante más de medio siglo.

De acuerdo con Escobar, “las instituciones de educación superior deben ser unos escenarios naturales para que se dé la discusión y la confrontación pacífica de ideas”. En este punto concuerda Juan Carlos Amaya Castrillón, vicerrector general del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), quien también afirma que, en la institución para la cual trabaja, se percibe a la educación como salvadora de la realidad.

El Politécnico y el ITM hacen parte de la Alianza Pública por la Educación Superior G7, un grupo de universidades públicas que, además de la ejecución de sus agendas propias, optaron por asumir la

pedagogía de la paz como un reto conjunto. El 16 de agosto del año anterior, la coalición presentó la Cátedra Itinerante para la Paz G7, con el fin de abrir un “espacio de reflexión y formación de la comunidad académica y la ciudadanía en general en torno al momento histórico que vive Colombia”.

Conformado además por el Tecnológico de Antioquia, la Institución Universitaria Pascual Bravo, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y la Institución Universitaria de Envigado, el Grupo de los Siete dio a conocer la planeación de la Cátedra con un evento mensual entre agosto y noviembre del año anterior, para así complementar las iniciativas educativas particulares de cada establecimiento.

Aunque las iniciativas tienden a consolidarse en forma de foros o conferencias, la novedad entre las actividades que las instituciones realizan radica en los enfoques que se conciben o en los invitados a los cuales acuden. Se han presentado

casos como el del ITM, que organizó una charla donde los ponentes eran desmovilizados, o el del Politécnico, que creó el diplomado 'Pedagogía para la Paz', para que los docentes asistieran y, posteriormente, articularan el trabajo realizado a sus cursos.

Por su parte, la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) hace evidente la intención de la comunidad por abordar el posconflicto desde diversos frentes. Álvaro Gómez Fernández, vicerrector académico, destaca la labor del grupo Construcción de paz, integrado, entre otros, por el director de la facultad de Ciencias Políticas y por decanos de distintas escuelas, en el cual se evaluó la oferta existente en el portafolio de programas de la universidad en relación con el tema en cuestión.

Otras de las ideas que, según Gómez, valen la pena que se resalten, son el Simposio de la Escuela de Ciencias Sociales, donde se estableció el posconflicto como uno de los ejes temáticos del evento, o las propuestas que han adelantado las principales escuelas de ciencias sociales y humanas, como espacios de diálogo

con profesionales de sus propias disciplinas, o las cartillas para la paz que la facultad de Ciencias Políticas se encargó de publicar.

Sin importar su naturaleza o la procedencia de sus ingresos, las instituciones de educación superior de Medellín han coincidido en no tomar partido por ninguna de las fuerzas políticas involucradas en el Proceso de Paz, llámense Gobierno, guerrilla u oposición. En este sentido, los directivos del Politécnico, el ITM y la UPB apuntan a un mismo objetivo: no fomentar más división de la que ya existe.

Para el rector general de la Fundación Universitaria Luis Amigó, el Padre José Wílmor Sánchez Duque, "hay un problema, que es la polarización que se está generando en el país, y que no es sana, porque pareciera que, más que construir país, lo que se están defendiendo son intereses políticos partidistas". Sánchez reivindica también en su discurso la misión que, según su criterio, deben perseguir todas las instituciones de educación superior en el país: "formar

ciudadanos con consciencia crítica, ética y social”.

Lo anterior incluye a las instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano, cuya función de ampliar el panorama educativo desde el Sistema Nacional de Educación Terciaria las convierte, de acuerdo con Jaime Pérez Tamayo, rector del Instituto Metropolitano de la Educación, en las entidades más aptas para afrontar el posconflicto, en tanto dignifican el trabajo y lo formalizan.